



Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia](#).

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.



NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es>

LA AUTONOMÍA TERRITORIAL COMO UN RETO PARA EL ESTADO COLOMBIANO*

Alejandro Romero Pinzón¹

Universidad Católica de Colombia

RESUMEN

La autonomía del territorio, es una potestad de organización política que permite a las sociedades diversas como la colombiana, plantear objetivamente las posturas heterogéneas que surgen en las dinámicas sociales, favoreciendo los intereses de los múltiples sectores. El antecedente de dicho pensamiento, se origina a partir del concepto de autonomía territorial Español, gestado en la conformación de las Cortes de Cádiz, manifestado con dimensiones de carácter constitucionalista, planteó una organización territorial que plasmaba una independencia provincial, que fue desechado con el nacimiento de la Republica Colombiana y el centralismo conservador de finales del siglo XIX, que encontró la cúspide con la expedición de la Constitución Política de 1886, ofreciendo un periodo prolongado estabilidad jurídica que se prolongó por más de cien años, sobre la cual el Estado colombiano se edificó como república, teniendo consecuencias inmediatas en lo que respecta a la autonomía territorial. Los factores característicos de esta organización como el centralismo excesivo, que tuvo variables parciales con la expedición del nuevo texto Constitucional Colombiano, conducen a la construcción del concepto denominado como pluralismo social, que se plasma en el título XI de la Constitución Política de 1991 buscando responder a la realidad del territorio nacional.

Palabras clave. Autonomía territorial, Pluralismo político, Estado Federal, Estado Centralista, Constitución Política, pluralismo, Colombia.

* Artículo de Reflexión presentado como Trabajo de Grado para optar al Título de Abogado, bajo la Dirección del Dr. Cesar Augusto Castillo Dussan Docente de la Facultad de Derecho. Universidad Católica de Colombia. Sede Bogotá D.C. 2021

¹ Estudiante del programa de Derecho, egresado de la Universidad Católica de Colombia, con terminación de materias en Junio de 2018. Cód. 2108422 aromero22@ucatolica.edu.co

ABSTRACT

The autonomy of the territory is a power of political organization that allows diverse societies such as Colombia to objectively pose the heterogeneous positions that arise in social dynamics, favoring the interests of multiple sectors. The antecedent of this thought originates from the concept of Spanish territorial autonomy, conceived in the conformation of the Cortes of Cádiz, manifested with constitutionalist dimensions, proposed a territorial organization that embodied a provincial independence, which was discarded with the birth of the Colombian Republic and the conservative centralism conservative late nineteenth century that met the cusp with the issuance of the Political Constitution of 1886, offered a prolonged period of legal stability on which the Colombian State was built as a republic, having immediate consequences in regard to territorial autonomy. Organizational factors such as excessive centralism, which had partial variables with the issuance of the new Colombian Constitutional Text, lead to the construction of the concept denominated as social pluralism, which is reflected in title XI of the 1991 political constitution seeking to respond to the reality of the national territory.

Keywords. Territorial autonomy, Political pluralism, Federal State, Centralist State, political constitution, pluralism, Colombia.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

1. EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y AUTONOMÍA TERRITORIAL EN ESPAÑA, EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX
 - 1.1. LA CORTE DE CÁDIZ Y SU INFLUENCIA CONSTITUCIONAL EN LOS ESTADOS AMERICANOS
 - 1.2. INFLUENCIA EN LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN COLOMBIA. UNA APROXIMACIÓN A LA AUTONOMÍA TERRITORIAL
 2. CONSTITUCIONALISMO COLOMBIANO ENTRE EL CENTRALISMO Y LA AUTONOMÍA TERRITORIAL
 - 2.1. CONSTITUCIÓN DE 1886 Y EL CENTRALISMO EXTREMO
 - 2.2. LA CONSTITUCIÓN DE 1991 COMO GESTORA PARA CONSTRUIR LA AUTONOMÍA TERRITORIAL
 3. PROPUESTA PARA UN NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
 - 3.1. PLURALIDAD
 - 3.2. ESTADO REGIONAL
- CONCLUSIONES
REFERENCIAS

INTRODUCCIÓN

Para abordar el tema de la autonomía territorial en Colombia, resulta importante mencionar las características jurídicas y políticas de la nación española, son producto de un proceso de conformación histórica, que durante siglos de interacción cultural, social y étnica, implementó a diferencia de las demás naciones europeas. Estableció, un modelo de sociedad heterogénea y diversa, compuesta por variables originadas por la ocupación de más de siete siglos de las comunidades árabes, esto le permitió cierta tolerancia con respecto a las diferencias sociales y religiosas, las cuales se opacaron con el surgimiento del Estado moderno español, unificado por los Reyes Católicos que lograron erradicar la ocupación árabe de Granada y promovieron la exploración marítima que concluyó con el descubrimiento de América (Fernández, 2015, p. 41).

A pesar de la fuerte influencia de la religión católica en el modelo de Estado monárquico español, la capacidad de adaptación social de la nación ibérica configurada como una nación tolerante, repercute ampliamente en el Nuevo Continente durante la colonia. Como consecuencia se evidencia un fenómeno diferente al de la extensión de las comunidades originarias como se observó en el norte del continente, que se concretó en un sometimiento de la población nativa, que obtuvo beneficios por parte de la corona, con la construcción de los resguardos indígenas que persisten en el estado moderno colombiano, como producto de un indiscriminado trato a las comunidades indígenas (Tirado, 2007, p. 26), configurándose así parcialmente los primeros vestigios de autonomía territorial con sujeción al Estado Monárquico.

La influencia del pensamiento filosófico español, que tempranamente se desarrolló en relación con las posturas contractualistas reconocidas en Inglaterra y Francia, pero que se opacó por el poderío de estas dos naciones, se materializó desde la promulgación de la primera Constitución española en 1812 promovida por la Corte de Cádiz, que pretendía restarle la legitimidad a la designación como monarca español a José Bonaparte (Busaall, 2009, p. 440). Sin embargo, la formación de la elite criolla colombiana, fundada en las mismas corrientes filosóficas de origen ibérico, ofrecieron un soporte para la exigencia de una Constitución por parte de la Junta Suprema de Santa Fe en 1810, que marcaba un avance importante en materia jurídico política, que se alejaba del pensamiento revolucionario liberal que se impuso nueve años más tarde con el triunfo del ejército republicano liderado por Simón Bolívar.

A partir del nacimiento de la República Colombiana, se denotó un largo periodo de inestabilidad jurídica, consecuencia de las tensiones políticas y la convulsionada guerra de poder entre ideales de carácter liberal y conservador, que plasmó sus efectos en el modelo de organización estatal conocido como “la patria boba”, que estableció una división política entre federalistas y centralistas, que se sostuvo a lo largo del siglo XIX (Robayo, 2010, p. 16), culminando con la prevalencia de la Constitución Política de 1886 de carácter centralista, que radicalizó el orden territorial al derogar la Constitución de 1863 que rayaba por un federalismo extremo. A partir de ese momento, la organización territorial se definió por el centralismo hasta la reforma de 1945 con la creación de los departamentos y el abandono a la figura provincial y posteriormente con la reforma de 1968 en relación con la descentralización técnica por servicios, otorgando un grado de autonomía a las regiones que se sometían aun al centralismo extremo de la carta de 1886 (Castañeda, 2014, p. 26).

Con el marco constitucional de 1886, que exhibe durante el siglo XIX, un panorama cambiante con relación a la concepción jurídica de la autonomía territorial, que por la complejidad del territorio y la necesidad desarrollar el institucionalismo del Estado en todo el territorio, sucumbió a reformas constitucionales, entre las cuales se destacan por aportar a la autonomía territorial la de 1910, 1936, 1945 y 1968. Bajo este nuevo panorama, se plasman importantemente propias de la autonomía territorial, como la descentralización y la desconcentración de carácter administrativo y territorial, que tímidamente se observaron antes de las reformas.

Con la Constitución Política de 1991, se dio paso a un modelo de Estado unitario con descentralización administrativa, que liberó al país del extremo centralismo impuesto desde el siglo XIX, concentrando las disposiciones territoriales en el título XI del texto constitucional, pero que no reconoce una autonomía acorde con la nación colombiana, que se caracteriza por contener una diversidad étnica y cultural, que reclama un ordenamiento territorial más amplio, que garantice la dinámica política y económica dentro del territorio, respondiendo al concepto de la unidad.

El presente documento pretende resaltar la importancia del concepto del pluralismo social de la nación colombiana, para la configuración de la autonomía territorial que se desarrolla desde el

Texto Superior en el título XI, orientándose a responder a la incógnita ¿la materialización de la autonomía territorial de conformidad con las premisas del título XI de la Constitución Política de 1991, responden a las necesidades del Estado colombiano? Teniendo como punto de partida el análisis histórico de la nación española y su influencia en la formación de la república colombiana, para luego observar el vínculo entre el centralismo extremo formalizado con la Constitución Política de 1886 y sus repercusiones en la organización territorial, en contraste con una sociedad plural, situación que a la luz de la Constitución de 1991, se plantea como una consecuencia del pluralismo de la nación colombiana, que busca un reconocimiento garantista e incluyente. Sin embargo, la organización territorial centralista que se desarrolla en esta Constitución en contraste con la realidad exhibe una necesidad de organización provincial que facilita una organización regional a través de una administración autónoma, que no depende directamente del gobierno central y que satisface sus intereses de manera inmediata.

1. EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y AUTONOMÍA TERRITORIAL EN ESPAÑA, EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX

A pesar de que en las líneas del pensamiento occidental no se destaca abiertamente el pensamiento español, en comparación con la filosofía revolucionaria francesa o los destacados aportes jurídicos gestados en Inglaterra y Estados Unidos, que repercuten parcialmente en los planteamientos republicanos del nuevo continente, es importante atender a los planteamientos jurídicos y políticos de la nación española, que sostuvieron una línea jurídica y política gestada en las Cortes de Cádiz, ofreciendo límites al poder a través de una Constitución que respondiera a una autonomía provincial. Igualmente, el planteamiento filosófico político español, se arraigó importantemente en los países latinoamericanos, como consecuencia de la tolerancia a las sociedades diversas que generó los siete siglos de ocupación árabe en territorio ibérico (Selva, 2015, p. 17), permitiendo a los Estados nacientes, plasmar su filosofía en las estructuras políticas, que igualmente importaban elementos sustanciales del pensamiento ilustrado de occidente.

Un esfuerzo por construir los vestigios del pensamiento filosófico español, conduce principalmente a la influencia de la filosofía escolástica, que a su vez se representa principalmente por las teorías tomistas y agustinianas (Mirete, 2015, p. 470). Este pensamiento filosófico nutrió los enciclopedistas que no solo se centraron en Francia, toda vez que en gran

parte pertenecían a la iglesia católica y se extendieron a España, pone e. evidencia un panorama de conocimiento, que permitía plasmar ideas acorde a la interpretación de la realidad española durante los siglos XVIII y XIX.

Sin embargo, la filosofía ilustrada del continente europeo tuvo manifestaciones propias en cada estado, que se destacó particularmente con independencia en países como Inglaterra, en el establecimiento de corrientes como el utilitarismo, el empirismo y el laicismo, implementado de manera semejante en Alemania con el *Aufklärung*, que se desarrolló principalmente con una vertiente esteticista, presentándose igualmente semejante en el estado español (Diz, 1999, p. 135).

Este fenómeno de manifestaciones filosóficas respondiendo de manera diferente en todo el continente europeo, permite observar que cada país respaldado por unas características propias, generó una producción única de modificaciones de carácter ilustrado que no pueden presentar el mismo patrón de relevancia, porque tanto la sociedad y sus procesos históricos, de igual forma como el estado, se sustentan en una búsqueda de conceptos e instituciones que les permitan responder a su propia configuración como nación.

Durante el siglo XVIII, el movimiento filosófico español, de carácter diverso por su composición y falta de desarrollo colectivo, se influenciada principalmente por el paradigma de la razón establecido por la filosofía ilustrada de Europa, introduciendo le en el desarrollo de disciplinas científicas, así como la implementación de posturas éticas, la liberación del pensamiento y la tolerancia la diversidad, qué en términos históricos se desarrolló en mayor medida en la sociedad española, producto de la ocupación árabe que sucumbió a la resistencia española a finales del siglo XV.

Como se expone anteriormente, el pensamiento español se expresó desde una ausencia de unidad, que tuvo representaciones importantes a través de la historia, teniendo expresiones de relevancia política y jurídica, como la composición de la Carta Magna Leonesa de 1188, que de manera previa y sin el reconocimiento de la sociedad occidental, sentó las bases del parlamento como institución política, pero que se opaca por el reconocimiento de la Carta Magna de 1215 en Inglaterra.

De igual forma, en el siglo XVIII consagró exponentes como Francisco Suárez, que desde el análisis filosófico y político desarrolló el pensamiento tomista desde la composición de obras como "*De legibus*" y "*Defensio fidei*", en donde se analiza la problemática del origen del poder se formalice la idea del pacto social y el derecho a la resistencia ante la ley injusta (Mirete, 2015, p. 470). Este aporte de la filosofía española, se reflejaría posteriormente con las determinaciones de la Corte de Cádiz.

En síntesis, se puede observar que el siglo XVII y parte del siglo XIX el pensamiento filosófico y político de la nación española se orienta al decaimiento en donde la filosofía se deja de lado, para plantear simplemente reflexiones éticas, orientadas a los límites del poder, es decir, que giró en torno a establecer un marco de acción para el poder, desde una postura ética y no normativa, caracteriza los siglos XVIII y XIX de la historia filosófica española. Sin embargo, los aportes de Francisco Suárez, permiten observar que los orígenes del constitucionalismo y su reflexión como instrumento que se produce a partir de un acto político o de poder, permiten observar los indicios del pensamiento español que se opacó por el reconocimiento de los aportes vanguardistas de la filosofía revolucionaria francesa y americana

1.1. La corte de Cádiz y su influencia constitucional en los Estados americanos

El poder que ejerció Napoleón en Francia, pronto se desbordó a sus vecinos ibéricos, que padecieron las intervenciones imperiales en 1808, con unos acontecimientos previos que debilitaron el poderío de la Monarquía Española, como la reciente victoria en la Guerra de las Naranjas en contra de Portugal en 1801, que a pesar de salir victoriosa tuvo un impacto en la reducción de tropas, así como las confrontaciones con Inglaterra en Trafalgar en 1805, que representaron una derrota naval significativa (Sánchez, 2008, p. 73). Sin embargo, el tratado de *Fountenbleau*, suscrito entre la nación Española y el Imperio Francés, que tenía como objeto facilitar la invasión de Portugal por parte de los españoles, a cambio del beneficio en extensiones de tierra bajo su administración, creaba una sensación de que Napoleón tenía por aliada al reino de España y que la monarquía no corría ningún peligro, situación que se desmintió con la captura del Rey Fernando VII y la imposición de José Bonaparte con las abdicaciones de Bayona que lo reconocen como nuevo monarca de España, sucumbiendo a las órdenes imperiales.

Es preciso anotar que, los antecedentes directos de la intervención francesa en España, obedecen a la negativa de Manuel Godoy como miembro encargado de la corona española, para el tránsito de tropas imperiales francesas, para facilitar la incursión a gran escala de las tropas Napoleón, situación que fue acusada de mala fe por el emperador francés y que lo vinculó a ejercer su poder militar para generar la abdicación a favor de su hermano de los reinos de España y Las Indias (Manfred, 1980, p. 44).

La ocupación francesa, permitió una expresión única en la nación española que, se nutrió del desarrollo intelectual de sus académicos altamente influenciados por un movimiento constitucionalista de carácter liberal, nutridos por una corriente filosófica tomista de resistencia a las normas injustas gestada en el pensamiento escolástico medieval, que se orientó a desconocer la imposición del emperador francés. Su máxima expresión se plasmó con las reuniones extraordinarias de las cortes instauradas en septiembre de 1810 en la ciudad de Cádiz, que se surtieron por un innovador sistema electoral, que concluyó con la elección de aproximadamente trescientos diputados, para la conformación de justas provinciales, de los cuales figuraron ciento cuatro en el acta de apertura de sesiones, conocida como las cortes de Cádiz (Varela, 2012, p. 193).

A pesar de que el aporte principal de la corte de Cádiz fue la promulgación de la Constitución de 1812, se puede observar que los desarrollos en materia constitucional fueron diversos, teniendo por un lado, la conjugación de ideas divergentes en el marco de una aparente asamblea constituyente, que en años venideros se convertiría en un instrumento de legitimación Constitucional y la formalización de la Constitución como un instrumento de límites al poder, que en el contexto de la Constitución de Cádiz de 1812, limitaba el ejercicio del monarca impuesto por Napoleón.

Con relación a la representación de ideas diversas en una sociedad heterogénea como la española, no se plantea un la posibilidad de identificarse por partidos, sin embargo las tendencias o grupos que encontraron afinidad la representación de ideas sin tener una filiación doctrinal, marca notoriamente el origen de la formación de los partidos políticos.

Una representación filosófica idealista, marcada por la escolástica y el historicismo nacionalista, se orientaba a defender una posición doctrinal de carácter ecléctico que proponía una soberanía compartir entre El Monarca y las Cortes, huyendo a las segundas la representación de las leyes fundamentales, esta posición era altamente opuesta al pensamiento revolucionario francés y en las doctrinas absolutistas. Una segunda representación ideológica se identificaba con el pensamiento liberal, que incorporan al pensamiento español los planteamientos revolucionarios de la asamblea francesa de 1789, teniendo como eje fundamental la soberanía nacional y la concentración de poderes en cortes unicamerales en virtud de la cual ganaría el poder del Estado (Vilches, 2014, p. 175).

Finalmente, una representación de diputados americanos, configurar a una tercera tendencia ideológica, que acogía dios de la neoescolástica española, el derecho de indias y los principios revolucionarios, concretando su doctrina en la teoría contractual de Rousseau, que también permitió exponer la teoría de los cuerpos intermedios expuesta por el barón de Montesquieu, en que ubica el Monarca encabeza El Ejecutivo pero que se somete a una especie de control por parte de otros órganos constituidos, expresando una monarquía1« constitucional semejante a la británica (Chust, 2006, p. 220).

Por otro lado, el continente americano altamente influenciado doctrinas españolas, especialmente en la élite criolla, descendiente de españoles nacidos en continente americano, se contagió de la tendencia constitucionalista expuesta en la corte de Cádiz, situación que no fue ajena a la capital del Virreinato de la Nueva Granada, en donde se gestó el 20 de julio de 1810, un Cabildo abierto, en virtud del cual se buscaba la expedición de una Constitución que limita los poderes del monarca, a la luz del reconocimiento soberano de la población del virreinato (Pareja, 2011, p. 17).

El proceso intelectual que condujo al establecimiento de la Junta de Santa Fe de 1810, obedece principalmente a qué criolla de ese entonces, se forjó intelectualmente con la doctrina gestada en España, y consecuentemente con el pensamiento que se elaboró la Corte de Cádiz, la Junta de Santa Fe construyó de manera semejante el grito de independencia del virreinato dela Nueva Granada, plasmando la necesidad existencia de una Constitución que impusiera límites al

monarca y respetara la autonomía soberana de la población granadina, resaltando la sumisión a la corona con independencia y garantía de rango constitucional (Bonilla, 2010, p. 107).

Concretamente, las demandas de una Constitución provincial semejante a la vista en el contexto español, permitieron formular los primeros esbozos constitucionales en el Estado colombiano y en los países latinoamericanos, que a partir de 1810 construyeron constituciones provinciales, teniendo como referente función del Socorro, la Constitución de Cundinamarca y más adelante la Constitución de Cúcuta carácter nacional, permitiendo observar influencia primaria del pensamiento español reflejada en Latinoamérica, que más adelante se opacaría por los grandes aportes de la Revolución Francesa introducidos tardíamente al continente americano, que dotó de argumentos filosóficos a los libertadores americanos Bolívar y San Martín.

Lo anterior permite observar, la diferencia en el pensamiento de los precursores del grito de Independencia Camilo Torres y Antonio Nariño en relación con el pensamiento filosófico funcionario francés que influenció a Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que es de carácter que impone el institucionalismo del Estado a través del ejercicio fáctico, marcando una tendencia en el constitucionalismo colombiano, ofrecería una prolongada inestabilidad hasta la promulgación de la Constitución centralista y conservadora de 1886.

1.2. Influencia en la organización territorial en Colombia. una aproximación a la autonomía territorial

Como una herencia el modelo político español, el virreinato de la Nueva Granada se organizaba por provincias, situación que al tenor del naciente constitucionalismo presentó una repercusión evidenciada en las constituciones provinciales, que surgieron entre 1811 y 1816 sin lograr que se estableciera una de carácter nacional. Sin embargo, el ejercicio constitucional permitió lograr avances en relación con la organización del Estado, la garantía de derechos y la administración de justicia, que facilitaba la solución de conflictos a la luz de un orden jurídico con sustento en una Constitución (Restrepo, 1993, p. 40).

Las constituciones provinciales promulgadas en el virreinato de la Nueva Granada una vez acogida de la idea de constitucionalización expuesta en la corte de Cádiz y su postura filosófica en relación con el poder y las estructuras estatales, se observaron en todo el territorio granadino,

destacándose la Constitución del Socorro 1810, las Constituciones de Cundinamarca y Tunja de 1811, las constituciones de Cartagena y de Antioquia de 1812, la Constitución de Popayán de 1814 y las constituciones de Mariquita y Neiva de 1815.

El constitucionalismo provincial experimentado en la primera década republicana de Colombia, orienta el pensamiento político a expresar la necesidad de una Constitución de carácter nacional, que se trunca va principalmente no sólo por las 9 constituciones provinciales promulgadas en esa década por las diferentes juntas de gobierno, actas orgánicas de gobierno y de autonomía que se hizo constante (Zuluaga, 2012, p. 230). No obstante, en 1821 se promulga la primera Constitución de carácter nacional, siendo una Constitución de corte conservadora centralismo unitario, que tuvo una vigencia de 7 años.

Con la Constitución de 1830 la República de Colombia expresa una vez más un centralismo unitario de carácter conservador un sistema presidencialista, que se prolongó durante 22 meses hasta la vigencia de la Constitución de 1832 de la República de la Nueva Granada, la cual aún ideología liberal sosteniendo una descentralización bajo un modelo de estado unitario, que tenía un corte presidencialista y que tuvo una vigencia durante 11 años. En 1843 se dictó la Constitución de la República de la Nueva Granada de una ideología conservadora que devolvía el centralismo unitario.

El planteamiento de una nueva Constitución de corte liberal en 1853 examinar nuevamente el centralismo unitario para un estado de corte unitario pero descentralizado, qué abrió paso a nuevas de corte liberal pero más radicales, proponían una organización territorial que respondiera al federalismo, teniendo en cuenta la autonomía con la que debían desarrollarse las regiones. Sin embargo, las provincias bien con gran entusiasmo la idea del federalismo destacándose entre ellas Antioquia, Medellín, Córdoba y Panamá, que históricamente sostenía una política de carácter netamente conservador (Coral, 2013, p. 54).

Concretamente, la Constitución de 1853, permitió examinar el debate de la organización territorial, que examinaba las fibras de los derechos que se concedería a cada provincia y la independencia con la que éstas plantearían el desarrollo institucional, marcando inicio del

planteamiento Federal en el estado colombiano que se propone con la promulgación de la Constitución de 1858 y posteriormente la de 1863.

Las leyes dictadas bajo la Constitución de 1858 que en su mayoría se destinaron a la regulación de temas fiscales y vigilancia electoral de los estados, que se tildaron de inconstitucionales por vulnerar las premisas de la Constitución de 1886 y que más adelante desencadenarían una guerra provocada por las ambiciones personales del General Tomas Cipriano de Mosquera, permitían deducir un pensamiento general sobre el sistema jurídico con sustento en la Constitución, pero que para fines de eficacia jurídica se nublaban con la inestabilidad política.

Con la Constitución de Rionegro, expedida “en nombre y por autorización del pueblo”, expresada bajo una tendencia romántica-germana en sus premisas, principalmente pretendió garantizar la libertad de expresión, caracterizada por permitir el uso y comercialización de armas en tiempos de paz, así como la negación de la aplicación a la pena de muerte por la totalidad de los estados, y la obligatoriedad de las practicas humanitarias. Permitió la confusión administrativa a partir de un sistema federal, que otorgó autonomía a los Estados para la expedición de códigos, pero una aplicación inicial se regulaba por el Código Civil de 1855. Bajo esta Constitución se puede reportar remotamente el precedente legal, teniendo en cuenta que la organización política dictada con la siguiente Norma Suprema, permitió tomar diversos elementos dictadas bajo sus postulados.

Un panorama parcial de la organización territorial a luz de las constituciones colombianas de 1830 y 1858, plantearon principalmente un centralismo ortodoxo que se desdibujó con las Constituciones de 1853 y 1863, para ser posteriormente absorbidas por el conservatismo triunfante que dio nacimiento a la Constitución Política de 1886, dejando de lado la autonomía territorial para sumergir al país en un orden territorial centralista con una organización departamental y municipal que depende directamente de las disposiciones del ejecutivo central.

Una perspectiva netamente histórico-jurídica, permitiría referir que es posible hablar de la supremacía de la Constitución como norma fundante a partir de la expedición de la Constitución federalista de 1863, también conocida como la Constitución de Rionegro o la Constitución para

ángeles, que se encargó de prescribir premisas constitucionales con carácter prevalente sobre la Ley, como dispone en el artículo 14 de esta norma refiriendo que, “Los actos legislativos de las Asambleas de los Estados, que salgan evidentemente de su esfera de acción constitucional, se hallan sujetos a suspensión y anulación, conforme a lo dispuesto en esta Constitución(...) ” (Constitución Política, 1863, art.14). Teniendo como consecuencia lógica, la destinación de un órgano estatal encargado de salvaguardar la norma suprema.

El importante legado de esta Constitución federalista permitió el inicio de una carrera conceptual sobre las dimensiones de un estado constitucional y garantista, además de exhibir un escenario de autonomía territorial con independencia autentica con sujeción a un Estado de carácter nacional. Igualmente, dentro de este marco normativo, se destaca sobre las innovaciones de carácter liberal, la denominada Acción Pública , destinada a ofrecer una protección a las normas constitucionales en contra del culto legal que heredamos notoriamente de la antigua Roma. El artículo 72 de la Constitución de Rio Negro, diseño arcaicamente un control de constitucionalidad entregado a la Corte Suprema, con el fin de hacer íntegro y fluido el ordenamiento social (Pinzón, 2017, p. 8).

2. CONSTITUCIONALISMO COLOMBIANO ENTRE EL CENTRALISMO Y LA AUTONOMÍA TERRITORIAL

En el Consejo Nacional de Delegatarios señalado Por el decreto 594 del 10 de septiembre de 1885, por el entonces presidente Rafael Núñez, que se instaló el 10 de septiembre del mismo año, se dispuso la expedición de una Constitución que permitiera una estabilidad con el conflicto rodante 7entre Liberales y conservadores que se reflejaba entre Federalismo y Centralismo respectivamente. Producto de esto se promulgó la Constitución de 1886 que perduró por más de cien años (Pinzón, 2017, p. 14).

Luego de un periodo de incertidumbre jurídica qué encontró estabilidad Constitución Política de 1886, la relación del orden constitucional con el territorio, se ha desarrollado bajo una ruptura que parcialmente se contrapone a los intereses del Estado unitario y el de las regiones, asumiendo una estructura que como consecuencia estableció un orden jurídico y político que no sostiene la soberanía que profesa, es decir, que solo es aplicable en ciertas regiones y que

condena a otras al abandono, una muestra de esto es el crecimiento indiscriminado de determinadas zonas en el territorio y el abandono de los territorios del sur, que precariamente sobreviven como instituciones estatales que carecen de presupuesto y autogestión.

2.1. Constitución de 1886 y el centralismo extremo

Es evidente que el centralismo radical de la Constitución de 1886 se opone al modelo Federal autónomo planteaba en la Constitución de 1863, logrando con la oposición hacer más compleja la concentración de poder, con la convicción de manifestar una soberanía unitaria, que delega a las entidades territoriales una función meramente administrativa.

Como prueba de lo expuesto, es la negativa de la apreciación de 3 proyectos jurados por José María Samper, José Domingo Ospina y Sergio arboleda, que a través de un ecléctico buscaron conservar aspectos positivos del federalismo, que encontraron en la propuesta de Miguel Antonio Caro, referente a la modificación de unas bases para la reforma que es legitimar un con la aprobación de las municipalidades del país, en donde se expresa claramente una sumisión al ejecutivo central, quien es el encargado de nombrar en esos entes territoriales. Esta acción buscaba crear un consenso parcial que tuvo respuesta positiva por parte de 605 municipios y un desacuerdo de 14 (Melo, 1989, p. 34).

Finalmente la aprobación del texto constitucional dejó atrás cualquier vestigio de federalismo de autonomía territorial, teniendo en cuenta que la Constitución d1886 inicialmente se presentó como una Constitución de partido y no como una Constitución nacional, situación que fue gradualmente cambiante teniendo en cuenta las reformas a las que se sometieron durante tu vigencia en el siglo XX, acomodando la norma superior a la realidad colombiana y abandonando la esencia partidista para enfocarla en una de carácter nacional.

Las reformas que sufrió la Constitución de 1886 a partir de su vigencia plantearon a partir de 1905, orientadas a responder a la organización territorial y en particular a la creación de departamentos, que se representaban con esbozos de autonomía territorial sin tener la capacidad desarrollo independiente de las premisas que imponga la política central.

La reforma de 1910 impulsada por Nicolás Esguerra, que representaba los postulados del partido liberal se encargó de crear la convergencia de Constitución sentido nacional permitiendo un avance de lo político a lo jurídico, dejando atrás sesgos del conservatismo, que verían al primer presidente liberal hasta 1930 con el ascenso de Enrique Olaya Herrera al poder. La reforma de 1936, impulsada por el segundo gobierno liberal a la luz de la Constitución de 1886, plasmó los vestigios del Estado social de derecho, promoviendo una reforma agraria y social, que impulsaron al país a los brazos del liberalismo (Vidal, 2002, p. 26).

La reforma de 1945 responde fundamentalmente al ordenamiento territorial, creó las intendencias y las comisarías y eliminó la figura territorial de la provincia (Naranjo, 2010, p. 56), como una respuesta a la necesidad de administración cursos propios de los entes territoriales, los cuales reducían su productividad por el extremo centralismo que se dejaba de lado y en la oportunidad de una respuesta efectiva del ordenamiento jurídico para el problema de territorialidad, plasmado fuertemente por la diversidad geográfica, la diversidad étnica y el complejo manejo regional permite la explotación económica de manera irregular determinadas zonas del país, siendo necesario la presencia del estado como ejercicio del poder soberano para optimizar explotación económica de las regiones, las cuales por la ausencia institucional pierden el norte el desarrollo de las actividades que se amparan en el marco jurídico.

Finalmente, la reforma de 1968 que sostuvo la descentralización técnica por servicios, permitió la incursión de las empresas públicas al escenario territorial, en la puerta de esta reforma observa principalmente en la década de los ochentas sumando conceptos como la descentralización administrativa y técnica, que permitió el planteamiento de la descentralización fiscal, con el objetivo de afianzar la autonomía para los municipios e impulsar parcialmente el desarrollo regional, que por un prolongado tiempo se estancó en las regiones apartadas, logro que se plasmó hasta la Constitución de 1991 (Sánchez, 2016, p. 17).

Para concluir parcialmente, se puede observar que la inestabilidad jurídica de carácter constitucional, osciló entre el centralismo unitario, el unitarismo descentralizado y el federalismo, buscando responder parcialmente a las necesidades de la nación colombiana, las cuales no se acogieron por parte de las elites conservadoras que triunfaron con la expedición de la Constitución Política de 1886, marcada por un centralismo agobiante que dejó en el olvido el

orden territorial y opacó el desarrollo autónomo de las regiones. Sin embargo, se observa que este centralismo ortodoxo profesado por el conservatismo, se produce como una respuesta inmediata al federalismo radical que se desarrolló con la Constitución de Rionegro, facilitando la aceptación del centralismo por quienes no aceptaban el extremo federalismo.

2.2. La constitución de 1991 como gestora para construir la autonomía territorial

En la asamblea nacional constituyente de 1991, convocada con base en un proceso de participación ciudadana, diseñada para entregar representación a las diferentes posturas que hacían parte de la escena política en ese momento, formulo para la Constitución del mismo año, en su preámbulo “un marco jurídico democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo”. La Constitución, que en el desarrollo de su contenido consagra preceptos como la democracia participativa, utilizada para legitimar de algún modo el poder vinculante del Estado y principios rectores de los propósitos a perseguir por el Estado colombiano como, el estado social de derecho, que pretende encaminar las funciones del marco jurídico colombiano ayudar a los grupos sociales menos favorecidos, pero también hace referencia a la composición estructural del gobierno, en tres ramas del poder público, y órganos autónomos que cumplirán funciones del Estado solo estando sujetos a la ley y a la Constitución, que hacen parte de la concepción del estado moderno, y muchos principios más que hacen parte de la descripción y fines del Estado (Pinzón, 2017, p. 16).

El ordenamiento territorial a la luz de la Constitución de 1991 abarca las formas en que se distribuye el territorio nacional, así como las formas en que las instituciones del Estado interactúan con los administrados y las formas en que se administran los recursos, la cultura, las actividades sociales y económicas, conjugando diferentes principios de carácter Constitucional (Castañeda, 2014, p. 22), en virtud de los cuales se destacan los fines esenciales del estado, la autonomía administrativa, la descentralización, la desconcentración y la delegación, entre otras.

La dogmática constitucional de la organización territorial en el Estado colombiano, responde desde hace dos siglos conceptos del Estado unitario, teniendo parcialmente vestigios de federalismo que fueron claramente opacados por la Constitución conservadora y súper centralista de 1886. Esta mecánica a la luz del estado unitario, permite extraer diferentes niveles de

concentración y de distribución del poder, suponiendo una autonomía de carácter regional, que obedece al mandato superior de la norma constitucional definiendo la organización del territorio y las estructuras de la administración.

El artículo 287 de la Constitución Política de 1991, establece la autonomía de las entidades territoriales, señalando que éstas gozan de autonomía para la gestión de sus intereses siempre y cuando sean acordes a la Constitución y la ley, delegando los derechos en de los cuales se destacan, la capacidad de gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan y administrar los recursos y establecer tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (Constitución Política. 1991, art 287), igualmente, se les otorga una participación en las rentas nacionales.

De la anterior Norma constitucional, se puede observar que la participación en las rentas nacionales representa una sujeción al centralismo, permitiendo cuestionarse si la autonomía de las entidades territoriales se ejerce efectivamente, exponiendo de primer plano una autonomía relativa qué afecta la productividad económica de las regiones, producto de un arraigado centralismo que a la luz de la modernidad y las necesidades del Estado requieren un planteamiento diferente.

Para la Corte Constitucional, la interpretación de la autonomía territorial, tiene unos límites qué son de rango constitucional y legal, resaltando que el grado de autonomía que el texto superior le otorgó a las entidades territoriales lo califica directamente la ley, la cual toma como sustento principal la Organización de Estado unitario. De este modo, los alcances de esta autonomía se manifiestan en dos vectores que comprende la ley de ordenamiento territorial, teniendo, por un lado, los mínimos y máximos del núcleo esencial y por el otro, la república unitaria (Corte Constitucional, 2001).

Con respecto al núcleo esencial de la autonomía de las entidades territoriales, se puede observar en el marco del artículo 287 de la Carta Política, en relación con la capacidad para gobernarse con normas propias y administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para su funcionamiento, situación que pone en evidencia diferentes dimensiones de la autonomía en el Estado colombiano. En primer lugar, se observa una autonomía de carácter político, relacionada

con la potestad de crear normas jurídicas que operen dentro del territorio, qué es la escala normativa ubican sujeción a la ley y a la Constitución, pero que se presentan vinculantes dentro del territorio de su competencia. En segundo lugar se observa una autonomía de carácter administrativo, se manifiesta en la capacidad que tiene la entidad territorial para definir las directrices de su gobierno, así como de elegir a sus dirigentes y defender los intereses de su territorio. Finalmente, la autonomía fiscal, que se materializa con la capacidad de fijar sus propios impuestos.

Por otro lado, hacer referencia a la autonomía administrativa evidentemente orienta el estudio del concepto de descentralización, implementado a finales de la vigencia de la Constitución de 1886 y consagrado fundamentalmente por la Constitución Política de 1991. Como anteriormente se expuso la descentralización tuvo origen en la reforma de 1968, gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, que se encargó de crear el situado fiscal para la repartición de recursos a los entes territoriales. Acorde con la reforma constitucional, el decreto 2275 de 1978, desarrollo la norma constitucional creando comités sectoriales departamentales, para orientar las inversiones de la nación en los entes territoriales, bajo una exposición autonomía ilimitada y sujeta las decisiones del ejecutivo central.

A partir de 1991 y con sustento en el nuevo texto constitucional, la descentralización se entiende Como un principio de la organización del Estado colombiano, que supone una delegación de competencias de la Administración central a las entidades territoriales, las cuales deben estar orientadas a los fines descritos en el artículo segundo del texto Superior, como premisa de todas las instituciones estatales, expresando dimensiones de carácter funcional o por servicios, así como por colaboración.

En relación con el contexto histórico en que se desarrolla la autonomía territorial y la descentralización administrativa, se puede concretar que el estado colombiano tiene una tendencia a establecer un estado de carácter regional, en donde la productividad de las regiones se optimiza por la capacidad independiente desarrollar su economía, encontrando dificultad en la forma de República unitaria que a través de una parcial descentralización responde precariamente a las necesidades de la población.

La Carta Política de 1991 estableció una organización territorial de carácter nuclear, que pone en la base a los municipios como entidad de carácter fundamental en el esquema de división política, en compañía de los distritos, que su vez fueron absorbidos por una corporación territorial más amplia denominada departamento (Pérez, 2004, p. 65). Igualmente, conforme a lo estipulado en el artículo 321 del Texto Superior, se configura la posibilidad del nacimiento de nuevas corporaciones de orden territorial al interior de los departamentos, las cuales se denominan provincias que podrán ser creadas por la iniciativa del gobernador, de los alcaldes de los respectivos municipios o de la cantidad de ciudadanos que determine la ley (Constitución Política. 1991, art 321).

Es importante destacar igualmente, que a pesar de que la Constitución de 1991 presenta un panorama mucho más amplio para la autonomía de las regiones y el fomento del institucionalismo de las diferentes entidades dentro del territorio, la misma Constitución Nacional se aferra parcialmente a un modelo anacrónico de distribución política, generado por el prevalente centralismo que sostuvo el modelo conservador de la Constitución anterior, exaltando dicha influencia a la luz del artículo 287 de la Constitución Política, que dispone la autonomía de los entes territoriales dentro del marco constitucional y legal, permitiéndoles gobernarse por autoridades propias, las cuales solo podrán ejercer las competencias que les correspondan, así como, Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y la participar en las rentas nacionales (Constitución Política. 1991, art 287).

Sin embargo, el planteamiento de alternativas para fomentar el progreso de las regiones, entendido como una interpretación teleológica del artículo 311 de la Constitución Política, recaía directamente en la expedición de ley orgánica de ordenamiento territorial, que fue expedida hasta el año 2011; sesgando las premisas del constituyente por dos décadas y encasillando parcialmente al país en un esquema de organización política que difícilmente fomenta el progreso para las regiones apartadas.

Con la expedición de la Ley 1459 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”*, el legislador define los conceptos generales marco del ordenamiento territorial, y abre la posibilidad para el progreso regional a partir del fortalecimiento regional. La norma en comento reafirma el concepto de unidad

nacional, exaltada como una muestra de integridad territorial desarrollada en el marco de una república unitaria, descentralizada, que permite la autonomía de sus entidades territoriales. De la misma forma, resalta importantemente el reconocimiento de la diversidad, reconociendo un escenario en el que comulgan diferencias en los territorios de carácter institucionales, económicas, sociales, étnicas y culturales.

Dentro de los aportes para el fomento del desarrollo territorial, se destaca por ministerio del artículo cuarto de la Ley 1459 de 2011, la naciente Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), como un organismo carácter técnico, que evalúa, revisa y sugiere políticas en materia de ordenamiento al Gobierno Nacional, de igual forma que a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Esta Comisión se encuentra compuesta por el Ministro del Interior o su delegado, El Ministro del Medio Ambiente o su delegado, El Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), o su delegado, 4. Un delegado de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), un experto de reconocida experiencia en la materia designado por el Gobierno Nacional, y un experto de reconocida experiencia en la materia designado por cada una de las Cámaras Legislativas.

Sin embargo, la norma referida se destaca fundamentalmente por contemplar el esquema de la denominada Región Administrativa y de Planificación (RAP), entendida como un conjunto de departamentos que se caracterizan por tener personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio que tienen como objetivo el desarrollo regional, la inversión y la competitividad, en el marco del artículo 306 superior. Es preciso anotar que a pesar de que la Ley 1459 de 2011 entrega parcialmente un instrumento de conformación de ésta entidad territorial, no se contempla en la práctica.

Concretamente, los aspectos principales desarrollados en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial son la objetividad en ofrecer instrumentos administrativos para fortalecer las regiones a partir del establecimiento de Zonas de Inversión para la superación de la pobreza y la marginalidad, estableciendo un modelo de organización política de carácter local que se favorecen con los Fondos de Compensación Territorial y de Desarrollo Regional, aumentando las posibilidades de mejorar las condiciones en materia económica. Igualmente se definen los

principios mínimos que orientan su ejecución los proyectos de inversión en el escenario regional simplificando las estructuras burocráticas.

3. PROPUESTA PARA UN NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

El Estado regional, se entiende como una forma de organización política, que reconoce la Independencia de regiones de manera semejante al Estado Federal, pero que concentra la administración en un estado unitario, concebido como una idea progresista de descentralización, que responde a características sociales, culturales e históricas. Su implementación se observa en sociedades diversas, facilitando la producción en términos económicos y la expresión política de una sociedad heterogénea.

El modelo de Estado regional, respuesta a una forma de organización estatal que requieren las sociedades diversas, las cuales requieren para optimizar su productividad en términos económicos, jurídicos y sociales, desarrollar su organización con una determinada autonomía, que le permita responder a su realidad, es decir, que la sociedades diversas por el hecho de ser diferentes, encuentran realidades diferentes a las que deben responder y es la autonomía entendida como la capacidad de autodeterminarse la que y te con elementos necesarios para el adecuado desarrollo social.

La sociedad española experimentó una diversidad semejante al Estado colombiano, encontró como respuesta para su organización política, el establecimiento de una república de carácter autónomo o estado regional, que permite la expresión de una autonomía de carácter político contenida en el marco constitucional. El planteamiento surgió en 1931 durante la Segunda República Española, que respeto la autonomía de las regiones de Cataluña, país Vasco y Galicia (Suel, 2008, p.170).

En relación con Colombia, se desarrolla a partir de los lineamientos de un Estado unitario, encuentra un límite que impide manifestar de manera abierta la autonomía de las regiones, teniendo en cuenta que la luz del Estado regional se concreta la existencia de un gobierno político central y varios gobiernos políticos regionales, que en términos legislativos genera una multitud

de órdenes legislativos regional. De manera semejante la Constitución de 1991 dio tratamiento al tema, sin embargo, el sesgo del unitarismo impide la expresión independiente las regiones.

Es preciso anotar, que el centralismo con tendencia al regionalismo de la Constitución de 1991, aplacó parcialmente la concentración de instituciones en el estado colombiano, aperturó la posibilidad de ampliar el rango de legalidad gradualmente a los departamentos fronterizos, sin tener la capacidad administrativa política y económica establecer la voluntad soberana a todas las zonas del país. Estas características del Estado unitario, impiden parcialmente la materialización de la legalidad y la trascendencia de las regiones que se someten posiciones del gobierno central, las cuales han encontrado respiro con la descentralización administrativa y la autonomía territorial de la carta de 1991, faltando un elemento de Real independencia como lo plantea el estado territorial.

El Estado regional reconoce la fisionomía peculiar de las regiones, los antecedentes históricos, la topografía y producción (Lucusuch, 2004, p. 2), elementos que parcialmente se contienen en la autonomía territorial colombiana, pero que no se expresan de manera clara y oportuna para las necesidades de las regiones. El territorio colombiano que cuenta con una capacidad productiva en relación con los recursos, ha creado una dependencia del gobierno central, qué le ha impedido reconocer el potencial de las regiones concentrando su principal fuente económica en la capital de la república, situación que ha generado un ámbito de legalidad en torno al interior del país, pero que no se expresa de igual manera en el resto del territorio, afectando la institucionalidad, la legalidad y la economía.

Concretamente se observa que, con los instrumentos legales desarrollados a partir de la Constitución de 1991, se orienta el ordenamiento territorial el establecimiento de alianzas territoriales como la RAP, que abre la posibilidad a la configuración de un estado provincial o regional, que otorgue autentica independencia para sus entes, con la premisa de unidad con fines políticos pero que respete la autonomía de sus núcleos de composición.

3.1. El pluralismo

El pluralismo, es un modelo de inclusión política que se plasma de manera general en las sociedades democráticas modernas, se caracteriza por generar una inclusión objetiva de posturas políticas teniendo en cuenta su fundamentación histórica y social, orientándose a establecer un orden democrático incluyente que se prolonga gracias a la aprobación general de la población, que encuentra representados sus intereses en las organización política (Pérez, 2017, p. 187).

Como anteriormente se observó, la sociedad colombiana históricamente se configuró como una comunidad heterogénea, que conjuga diferentes posturas sociológicas, políticas y cosmogónicas, que encuentran su origen en la evolución histórica del territorio, resaltando una necesidad expresa de reconocer el pluralismo como instrumento determinante para la organización social. Sin embargo, en el escenario mundial, resulta constante a promoción del pluralismo a causa de una doctrina democrática filosófica, que a pesar de fundarse en el Romanticismo Clásico Alemán para incoar esta postura, se aleja en la implementación de sus postulados.

En consecuencia, la idealización del pluralismo como un elemento propio de la democracia, permite reconocer la necesidad que encuentra el pluralismo de articularse con otros conceptos que orbitan en la concepción del Estado moderno, dejando claro, que a pesar de encontrar variables respecto del Estado Liberal Clásico, se aferra a una estructura institucional que responde tímidamente a los problemas modernos, reflejando la necesidad de otorgar instrumentos políticos y posteriormente jurídicos a cada una de las posturas que aglomera el pluralismo para una expresión real y material de las premisas filosóficas de este concepto.

De esta manera, las sociedades plurales como la colombiana, están llamadas a otorgar instrumentos políticos que excedan la participación democrática plasmada en la Constitución Política de 1991, orientándose al establecimiento de instituciones que de manera efectiva materialicen el pluralismo en cada región, abandonando parcialmente el centralismo que históricamente ha generado un apartamiento y desconocimiento del orden institucional, sumiendo al Estado en una interminable historia de guerras que no le permite trascender.

En síntesis, en el marco del Estado colombiano, el pluralismo democrático incorporado con la Carta Política de 1991 no se plantea como una herramienta que garantice pluralismo incluyente y realmente representativo, resaltando la necesidad de generar un cambio trascendental que otorgue representación real a través de instituciones que reconozcan la diversidad e integren sus premisas a los objetivos del Estado.

3.2. Estado regional

El Estado Regional, es un concepto de estado, que parte del reconocimiento de la diversidad en la población y en los territorios, permitiéndoles determinada autonomía para la satisfacción de las necesidades que se desconocen en la búsqueda de la objetividad del estado. Es decir, que dentro de un estado regional existe una desconcentración de poder estatal, en búsqueda de una ampliación en el cumplimiento de sus funciones, que a la luz de un estado centralista y unitario, se desconocen en determinadas regiones o zonas que por su particularidad carecen de la presencia de las instituciones del Estado (Lucusuch, 2004, p. 4).

De lo anterior, se exalta la configuración de dos elementos fundamentales del estado regional, que recaen en la particularidad de los territorios y la pluralidad de la sociedad, aspectos que no son ajenos a las características históricas y sociales de Colombia, teniendo en cuenta que por su cambiante geografía y su riqueza étnica y cultural, le están dados los requisitos para acceder a la configuración de un estado regional.

Sin embargo, las condiciones únicas del territorio colombiano, aunado a la diversidad demográfica de las mismas, requieren de una presencia importante de las instituciones estatales para garantizar los fines constitucionales del Estado colombiano, contenidos en el artículo segundo superior, situación que a lo largo de la historia, ha rezagado a una porción de la población del país, quien ha encontrado presencia estatal principalmente en el centro del mismo y aleatoriamente en regiones limítrofes, representando un beneficio parcializado que desconoce la diversidad y el mismo orden constitucional.

Concretamente, el concepto del estado regional se orienta a una búsqueda de reconocimiento de autogobierno, que vela por el reconocimiento de unas minorías que dentro del marco de la

democracia requieren de su reconocimiento en una sociedad ampliamente diferenciada. Como anteriormente se evidenció, a pesar de que la sociedad colombiana se ha manifestado diversa desde el inicio de su vida republicana, no ha sido capaz de reconocer dicha diversidad en términos políticos, razón por la cual dicha autonomía se ha sometido a los arbitrios del centralismo, dejando de lado a comunidades que integran el territorio.

Conforme a lo acotado, se determina entonces que los elementos físicos y demográficos que componen al Estado colombiano se deben orientar al reconocimiento de un estado regional, que permita a las comunidades del territorio corregir y equilibrar las situaciones jurídico-políticas que históricamente ha desconocido en centralismo extremo que ha permanecido levemente afectado durante los dos siglos del nacimiento del Estado.

Conclusiones

La autonomía territorial planteada con la Constitución de 1991 exalta la necesidad de abandonar el centralismo radical que consagró la Constitución de 1886, situación que permitió la concentración de los recursos y las instituciones del Estado al interior del país, permitiendo observar una expresión de la legalidad que no se ejerce en todo el territorio nacional.

La Constitución de 1991 reconoce como entidades territoriales a los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas (Constitución Política. 1991), como expresiones institucionales dentro del territorio nacional, que en determinada porción ejercen labores administrativas dentro del marco constitucional y legal. La autonomía en estas regiones presenta un núcleo esencial respecto a la capacidad para gobernarse con autoridades propias, las cuales son elegidas por sus habitantes, la administración de recursos y el establecimiento de tributos para el cumplimiento de sus funciones y la ejecución de competencias que le asigne la Constitución y la ley.

Sin embargo, la participación en las rentas nacionales, impone un límite a la autonomía y genera una sujeción, que constituye un relativismo con respecto a la autonomía, que impacta fuertemente la capacidad de las regiones para optimizar sus recursos políticos, económicos y sociales. La evidencia de la deficiencia para ejercer una autonomía territorial, tiene un arraigo

histórico que no se ha podido superar, toda vez que quedó plasmado en la Constitución de 1991 y que a pesar de mitigarse por sus premisas, requiere de una implementación de lo político con características diferentes como lo plantea el Estado regional.

El Estado regional es un planteamiento que surge en las sociedades diversas, como respuesta a la necesidad de entregar la administración política a determinados sectores la sociedad que presentan una divergencia con respecto a la mayoría, permitiéndoles una expresión libre que optimiza la producción de sus recursos culturales, sociales, económicos y jurídicos favoreciendo el ejercicio de la Administración central, que prolonga la legalidad acerca institucionalismo estatal y el cumplimiento de los fines que se propone.

Concretamente, la organización territorial colombiana requiere una ampliación de la autonomía, a partir de la liberación del sesgo del centralismo, permitiéndole trascender a formas de organización que hasta el momento no se ha planteado determinadamente la sociedad colombiana, pero que encuentran un vestigio de cambio con la posibilidad de constituir provincias y regiones a partir de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Este planteamiento, refleja parcialmente la influencia española a partir de la construcción de provincias, que atienden al concepto de unidad, constituidas en sociedades diversas que se orientan al progreso regional y la productividad económica.

En síntesis, lo que mejor se acomoda a la realidad colombiana se plantea en las características del Estado regional, que reconoce la fisionomía particular de todas las regiones, atendiendo a las dimensiones históricas y geográficas, en donde se expresa claramente la autonomía, apartándose de la dependencia del gobierno central, que le ha impedido reconocer el potencial de las regiones concentrando su principal fuente económica en la capital de la república.

Referencias

- Bonilla, H. (2010). El 20 de Julio aquel.... *anuario colombiano de historia social y de la cultura*, vol. 37, n.º 1, 85-119.
- Busaall, J. (2009). El reinado de José Bonaparte: nuevas perspectivas sobre la historia de las instituciones. *Historia Constitucional*, núm. 9, septiembre, 439-448.
- Castañeda, L. (2014). *Ordenamiento territorial: elementos para su desarrollo*. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Chust, M. (2006). Entre la insurgencia y el colonialismo: las Cortes de Cádiz y el autonomismo americano 1808-1837. *Revista historia y sociedad* No. 12, 217-238.
- Corte Constitucional. (2001). *Sentencia C – 1258*. Magistrado Ponente. Jaime Córdoba Triviño.
- Diz, A. (1999). *Idea y vivencia de Europa en la España del siglo XVIII*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Fernández, A. (2015). Transmisión de las ideas de economía política de España hacia Inglaterra en el siglo XVII. *Iberian Journal of the History of Economic Thought* Vol. 2, Núm. 2., 32-59.
- Lucusuch, R. (2004). *Introducción al estudio del estado regional ¿una solución a los desequilibrios territoriales?* Córdoba: VI Seminario nacional de la red de centros académicos para el estudio de gobiernos locales.
- Manfred, A. (1980). *Napoleón Bonaparte*. Madrid: Ediciones Akal S.a.
- Melo, J. (1989). *Nueva Historia de Colombia Vol III*. Bogotá: Editorial Planeta.
- Mirete, J. (2015). *La filosofía española de los siglos XVI y XVII y el proceso emancipador hispanoamericano: la figura de Francisco Suárez*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Naranjo, V. (2010). *Teoría Constitucional e Instituciones Políticas*. Bogotá: Temis.

- Pareja, M. (2011). *Testigos y actores de la independencia de la Nueva Granada - 20 de julio al 15 de agosto de 1810*. Navarra: Universidad de Navarra.
- Pérez, M. (2004). La conformación territorial en Colombia: Entre el conflicto, el desarrollo y el destierro. *Cuadernos de Desarrollo Rural* 51, 61-90.
- Pérez, M. (2017). Tres enfoques del pluralismo para la política del Siglo XXI. *Ideas y Valores*, 66, 177-202.
- Pinzón, J. (2017). *La tutela contra providencias judiciales, un instrumento constitucional de seguridad jurídica*. Bogotá: Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho.
- Restrepo, C. (1993). *Primeras constituciones de Colombia y Venezuela 1811-1830*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Robayo, J. (2010). REFLEXIONES EN TORNO AL IMPACTO DE LA PATRIA BOBA. LA INDEPENDENCIA DE TUNJA Y SU PROVINCIA. *Revista Historia Y MEMORIA*, Vol. 1, 11 - 34.
- Sánchez, A. (2016). *Revisión histórica del proceso de descentralización administrativa y sus restos en Colombia, de 1985 a 2016*. Bogotá: Universidad Santo Tomás.
- Sánchez, M. (2008). La invasión Napoleónica ¿guerra de Independencia o guerra civil? *Monte Buciero* 13. *Catabria durante la guerra de independencia*, 29-99.
- Selva, A. (2015). *La influencia árabe en la lengua y la cultura española*. Barcelona: Universidad Autònoma de Barcelona.
- Suelt, V. (2008). La organización territorial colombiana frente a la tendencia contemporánea de configuración federal. *Estudios Socio-Jurídicos enero-junio*, 158-200.
- Varela, J. (2012). Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 (una vision en conjunto). *anuario de derecho parlamentario*, núm. 26, 191-208.

- Vidal, J. (2002). *La Región en la organización territorial del Estado*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Vilches, J. (2014). Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 en la historiografía progresista de mediados del siglo XIX. *Revista de Historiografía* 20, 171-188.
- Zuluaga, R. (2012). Las vicisitudes de la Primera República en Colombia (1810-1816). La interpretación centralista de nuestro proceso de Independencia. *Revista de Derecho* N° 38, 225 a 239.